

Especial "**Ley de Memoria Histórica**", **incumplimientos y deficiencias**

Memoria Libertaria

CGT

Confederación General del Trabajo | www.memorialibertaria.org

Nº 7. Otoño 2008. Edita: Comisión Memoria Libertaria CGT



HACER MEMORIA

El camino de la recuperación de la Memoria Colectiva ni empieza ni se cierra con la Ley 52/2007, conocida popularmente como "Ley de la Memoria Histórica", porque la memoria trasciende a cualquier normativa que quiera regularla. Décadas anteriores, diversos colectivos e individualidades han trabajado y luchado por mantener viva la llama de la memoria de la dignidad de todos los hombres y mujeres que vivieron y lucharon por un mundo nuevo. Especialmente las organizaciones libertarias han servido para conservar y transmitir la memoria de nuestros mayores, testigos, protagonistas y

víctimas de la Guerra, la Revolución Social y de la lucha antifranquista. Para la CGT la recuperación de la memoria no es un compromiso reciente. Está en sus propios estatutos cuando se propone "Fomentar el conocimiento y difusión del pensamiento libertario y anarcosindicalista". Y esto lo viene haciendo a través de la recuperación de los nombres de los militantes de la Confederación, las ideas que defendieron y los documentos que generaron esos miles de hombres y mujeres, compañeros y compañeras que lo dieron todo por la causa de la libertad. Porque mantener la memoria colectiva es un imperativo moral y un acto de justicia con las víctimas. Es un deber de la memoria recordar para que se haga justicia. Seguiremos

reivindicando, junto a las entidades memorialistas, el "Deber de Memoria", basado en la Verdad, Justicia y Reparación.

¿Para qué ha servido la Ley de Memoria Histórica?

La Comisión de Memoria Libertaria en su reunión de mayo acordó dedicar el especial número VII, de los que viene publicando, a analizar algunos aspectos de la Ley 52/2007, así como su grado de cumplimiento y desarrollo desde su aprobación en diciembre del año pasado. Estos son los trabajos que te ofrecemos a continuación.

LOS ARCHIVOS ESTATALES ESPAÑOLES

ANTE UN GRAN RETO: LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS EN LA REPRESIÓN FRANQUISTA

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidía, en el pasado mes de agosto, abrir diligencias previas ante las demandas recibidas en su juzgado reclamando la localización de personas desaparecidas en España durante la guerra civil y la posguerra. A partir de esta decisión, como paso previo a cualquier posible actuación posterior, se ha dirigido a las administraciones públicas y a las entidades que, como la Iglesia, puedan contar en sus respectivos archivos, con los documentos que aporten los datos esenciales para la elaboración de un censo de desaparecidos. La judicialización de la búsqueda de los desaparecidos supone un paso más hacia la averiguación de la verdad sobre la represión que acompañó la construcción del denominado Nuevo Estado, a partir de la sublevación militar del 18 de julio de 1936 que condujo a la Guerra Civil. Al mismo tiempo, viene a constatar el fracaso de las administraciones públicas en su intento por superar, por cauces administrativos, esta asignatura pendiente de la transición.

La política archivística, contagiada del pactismo que caracterizó la transición política española, asumió también un pacto de silencio, implícitamente aceptado por los agentes políticos, sobre las atrocidades cometidas en los años treinta y cuarenta. A diferencia de otros países europeos que salieron de regímenes dictatoriales en los mismos años, en España no hubo juicios ni exigencia de responsabilidades. Mientras en Grecia se juzgaba a los "coroneles" y en Portugal se iniciaban los procesos de depuración del salazarismo en los organismos públicos en España se comenzaba a construir una sociedad democrática haciendo tabla rasa con el pasado. Así, el silencio de los archivos actuaría como refuerzo de la Ley de Amnistía del propio año 1977, que sacaba de las cárceles a los opositores del franquismo y permitía el regreso de los exiliados pero que, a la vez, dejaba libres de toda responsabilidad a los gobernantes, políticos, militares y altos funcionarios del régimen anterior que hubieran podido cometer cualquier tipo de delito.

En efecto, muchos fondos documentales fueron destruidos o se perdieron; el acceso a otros quedó cerrado por décadas y, aún hoy, las principales fuentes sobre la represión franquista, al menos las de aquella que se documentó al amparo de ciertas



Ana Avila (AMHyJA) 28.02.2008/ frente al Teatro de la Maestranza (Sevilla)/ entrega de medalla de Andalucía a Baltasar Garzón. De izquierda a derecha: Juan Pérez Silva (hijo "Libertaria"), Paqui Maqueda (AMHyJA), José L. Gutiérrez y Cecilio Gordillo (RMHSA de CGT.A)

formalidades legales, y que se conservan en los archivos de juzgados y tribunales militares continúan siendo de uso casi imposible, a pesar de no estar legalmente excluidas de la consulta pública. Y ello es debido, tanto a su deplorable estado de conservación, provocado por un abandono de decenios, alguien podría considerar que doloso, como a la falta de servicios públicos habilitados para su uso: infraestructuras y personal principalmente. Lo más dramático es que ninguna administración, de ningún signo político, ha sido capaz de regular estos archivos de la justicia militar que han quedado en el limbo jurídico. A los archiveros nos gusta recalcar que hacer política archivística no sólo es regular el acceso a los documentos, sino también fijar normativamente las obligaciones de los organismos públicos en cuanto a la conservación de los documentos y a su disponibilidad, de acuerdo con sus valores. Y si nos referimos a lo documentos que testimonian la represión política, éstos tienen tanto pleno valor administrativo como alto valor informativo, por cuanto las leyes reparatoras que se han ido elaborando desde el comienzo de la transición democrática los hacen imprescindibles en el aporte de pruebas exigido para obtener indemnizaciones, restitución de bienes incautados o rehabilitaciones públicas y los datos que suministran son fuente esencial pa-

ra los trabajos de investigación histórica sobre ese período, lo que justifica su conservación permanente.

Pero en el entorno internacional se desarrollaba a finales de los noventa, un movimiento universal a favor del conocimiento de la verdad sobre los delitos de lesa humanidad y genocidio así como sobre otras atrocidades, cuyo momento culminante se podría considerar el año 1998, con la creación de la Corte Penal Internacional. Ese movimiento haría converger, en un solo eje reivindicativo, las exigencias de "memoria, verdad y justicia" de amplios colectivos sociales y de miles de ciudadanos. Tras la experiencia de las Comisiones de la Verdad y a partir de la eclosión de los movimientos por la memoria en Europa y América Latina, en España surgirían con enorme fuerza las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica. Además, las actuaciones del propio juez Garzón en los casos contra Pinochet o contra los dictadores argentinos, seguidas en diferentes países por otros jueces y fiscales, invocando la competencia universal, rompieron claramente los límites jurisdiccionales territoriales y temporales. Esas acciones convertían en papel mojado las leyes de amnistía, perdón o punto final y, en países como Argentina, ante el riesgo de descrédito de una justicia local incapaz de juzgar a "sus" propios asesinos,

acabarían declarando la nulidad de las leyes que amparaban la impunidad de las más graves violaciones de derechos humanos.

¿Cómo, en estas circunstancias, podrían quedar las administraciones públicas españolas al margen de los movimientos por la gestión del pasado? En este contexto, el año 2006 fue declarado por el Congreso de los Diputados como Año de la Memoria Histórica, y el conocimiento del pasado fue planteado como una de las líneas de actuación del gobierno de Rodríguez Zapatero en su primera legislatura (2004-2008), a la finalización de la cual se promulgaría la popularmente conocida como Ley de Memoria Histórica.

Sin embargo, todas las buenas intenciones declaradas por el nuevo gobierno, no tuvieron su paralelo en el desarrollo de las políticas archivísticas, absolutamente esenciales en toda política de memoria o de gestión del pasado. Sólo la creación, cargada de polémica por otra parte, en 2008 del Centro de la Memoria, cuya estructura, carácter y, sobre todo, cuyos futuros fondos documentales no son aún conocidos con claridad, se contabilizaría entre las medidas concretas tomadas por el gobierno español en este sentido. En cambio, los grandes fondos militares considerados secretos continúan esperando su lógica desclasificación

y su posterior inmediata apertura a la consulta y los archivos de tribunales, y juzgados militares siguen siendo inutilizables, a falta de una ubicación adecuada y de una entidad u organismo que se haga responsable de ellos.

Todos los grandes esfuerzos por la apertura real de los archivos y su correcta dotación han venido, contrariamente a lo que cabía esperar tras las expuestas declaraciones de intenciones de los gobernantes, de la sociedad civil. En primer lugar estarían las citadas asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, también Amnistía Internacional ha sido una tenaz voz clamando por la apertura de los archivos y, de forma más amplia, la Coalición Pro Acceso, se ha convertido en el cauce fundamental de exigencia de una ley de Acceso a la información de la que España carece. Algunas asociaciones de archiveros, como Archiveros Españoles en las Administraciones Públicas y Archiveros de Castilla y León se han sumado también a la exigencia de medidas concretas para impulsar el uso de los archivos como herramienta esencial para acercarse al conocimiento de la verdad y ayudar a la localización de desaparecidos así como a la rehabilitación y compensación de las víctimas de la represión.

Porque más necesarias que las grandes declaraciones políticas sobre el pasado son las políticas activas concretas. En primer lugar, en el terreno legislativo, se hace imprescindible la Ley de Acceso a la Información que, a pesar del declarado afán del gobierno por conocer el pasado, fue uno de los puntos incumplidos del programa de gobierno del Partido Socialista en la legislatura 2004-2008. Del mismo modo España no puede seguir careciendo de una Ley de Archivos que regule de forma clara el funcionamiento del Sistema Archivístico Español y concrete responsabilidades y competencias. En segundo lugar, en el terreno de las dotaciones, los grandes archivos generales son incapaces de asumir nuevas transferencias debido a la saturación de sus depósitos y a la escasez del personal necesario para su gestión, de ahí que sea urgente la ampliación de estas infraestructuras con nuevos depósitos de archivo y la ampliación urgente de las plantillas de archiveros

Antonio González Quintana

Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública

VÍCTIMAS DE LA IMPOSICIÓN RELIGIOSA

La Jerarquía Eclesiástica sabe defender muy bien sus privilegios, pero ¿quién defiende los derechos y las libertades civiles contra la moral católica?

Después de tantos y tantos siglos del predominio de la Iglesia Católica en España ya es hora que el Gobierno se plantee la laicidad del Estado.

La Iglesia no solo apoyó la sublevación fascista del 18 de julio de 1936, antes había conspirado en contra de la República y después, ganada la guerra, se constituyó en el pilar donde se sujetó el poder dictatorial. La educación pasó a ser la simiente donde enraizaría la sumisión y la obediencia por ello la religión, en una u otra forma, estaba presente en todas las asignaturas. Los símbolos eran -y son- omnipresentes y las actuaciones del nacionalcatolicismo estaban impregnadas de represión. Alentó y consintió asesinatos, en nombre de Dios, contemplando desfiles militares y bendiciendo durante cuarenta años la dictadura del fascista Generalísimo Francisco Franco Bahamonde.

Bajo la idea de que es la única religión verdadera continúa enseñando a los niños y niñas "sus verdades", que no son otras que la ideológica de siempre: Desde que el mundo lo creó Dios, -que realiza milagros bajo su bondad suprema-, hasta el temor al infierno, - si no eres ni piensas como ellos sucumbirás en el fuego eterno-. Teorías que desdican la ciencia y el buen sentido común de un pensamiento libre.

El Gobierno de nuestro país mantiene privilegios económicos establecidos con la Iglesia sufragando además los colegios concertados religiosos fomentando el dogma católico. En los centros públicos consiente las ideas pastorales que dan de comer a la Iglesia con el dinero de todos los contribuyen-



Desfile en un colegio de Valencia, 1943. Luis Vidal. Archivo José Huguet

tes, y lo que es más doloroso, confundiendo a los niños sobre la realidad de la hipócrita sociedad actual.

La Institución Eclesiástica tiene el monopolio de ser la única con poder para inculcar su pensamiento, a través de la educación, a los futuros ciudadanos españoles. La religión católica, sostén de la dictadura, fue cómplice y por tanto culpable del sufrimiento y miedo inculcado a los perdedores de la guerra. Tenía una primacía que quiere seguir manteniendo y que un estado libre no puede consentir, ya que va en perjuicio de todas las personas que procesan ideas diferentes, - pero no por eso fuera de la moral ni de los sentimientos solidarios.

Vida de Nuestro señor Jesucristo. Ediciones Bruño, 1962. Página 1: En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Archivo Cristina Escrivá



La solución es la separación de la Iglesia y del Estado y la ruptura de los acuerdos establecidos con el Vaticano para lograr conseguir una primera generación que tenga libre pensamiento para elegir sus creencias, laicistas o religiosas, según su cultura, conciencia o costumbre, lo que se tendrán que lograr fuera de los centros de enseñanza.

La Jerarquía Eclesiástica sabe defender muy bien sus privilegios, pero ¿Quién defiende los derechos y las libertades civiles contra la moral católica? Es el Estado quien tendría que imponer la ética civil y el respeto a la libertad de conciencia. El artículo 16.3 de la Constitución Española sostiene que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" pero este punto ¿se cumple en nuestro país?

Tolerancia, libertad de conciencia, fomento de los valores universales en un marco de coexistencia y en igualdad de derechos es el reto y el futuro deseable que un Estado democrático debe ofrecer a sus ciudadanos.

La moral católica fue el argumento justificativo para el control ideológico en la dictadura, los actuales súbditos, son la consecuencia de ello. Después de 72 años del golpe fascista se debe restituir a la sociedad actual los valores republicanos de ese Estado moderno y laico, arrebatados a la fuerza por medio de una guerra civil, con ello se subsanaría la memoria de las víctimas leales a la voluntad del pueblo. Se conseguiría vencer por Justicia y por Ley. Amén.

Cristina Escrivà i Moscardó



LA "REACTIVACIÓN" DEL PROCESO DE MEMORIA HISTÓRICA



Acción de CGT en Madrid reclamando la revisión del Caso Granado y Delgado

La resonancia mediática de la decisión del juez Garzón y su repercusión en los medios políticos, intelectuales y religiosos han incitado a muchos a creer que estamos asistiendo a una decisiva reactivación del proceso de recuperación de la llamada "Memoria Histórica".

¿Lo es realmente o es mayor el ruido que las nueces?

Difícil de saberlo; pero es indiscutible que la intervención de Garzón ha vuelto a actualizar el tema de la "Memoria Histórica". Sobre todo que, después de tantos años de esfuerzos realizados por los colectivos memorialistas, el Gobierno socialista había logrado, con su Proyecto de Ley finalmente aprobado, desactivar en gran parte dicho proceso. Y ello porque, a pesar de las insatisfacciones y protestas, la Ley consiguió su objetivo: ocupar a la mayoría de esos colectivos en sus tareas específicas y administrativas, además de generar división entre ellos.

Sea lo que sea, e independientemente de la verdadera intención de Garzón, el hecho es que esta reciente actualización del tema de la "Memoria Histórica" ha puesto en evidencia el riesgo cada vez mayor de que el proceso se desactive a lo largo de interminables trámites y decisiones judiciales o, lo que sería peor aún, que se olvide del que era su principal objetivo: la rehabilitación moral, política y jurídica de las víctimas de la represión franquista. Pues, por todo lo que hemos venido oyendo y leyendo últimamente, lo que sí me

parece haber quedado bastante claro es lo que el Gobierno busca y lo que desean la clase política y los forjadores de la opinión, sin olvidar muchos historiadores e inclusive algunos colectivos memorialistas. Y es evidente que su objetivo no es esa rehabilitación sino simplemente que nos conformemos con lo que la Ley de marras propone al respecto o, en el mejor de los casos, que el Estado asuma la tarea de coordinar la información para buscar a los miles de fusilados que aún siguen enterrados en fosas comunes o en los bordes de las cunetas.

Yo no creo que este objetivo sirva para reactivar el proceso de "Memoria Histórica" sino más bien para desactivarlo. Sobre todo si los colectivos memorialistas lo asumen como prioritario y consagran todas sus energías a conseguirlo, olvidando exigir lo que antes estaba en el centro de la acción reivindicadora de ese proceso: "la completa rehabilitación moral, política y jurídica de las víctimas de la represión franquista", como lo había declarado la Vicepresidenta Primera del Gobierno al constituir la Comisión que en principio se llamó de "Memoria Histórica". Objetivo que, como sabemos, debía pasar por "la anulación de las sentencias franquistas".

No sé si sucederá esto; pero mi temor es grande de que suceda. No sólo porque todas las expectativas están centradas ahora en lo que dé la iniciativa de Garzón sino también porque me temo que las tardías e irrealistas exigencias de pedir responsabilidades a los responsables de los crímenes franquistas contribuyan a que se refuerce

la posición de los que buscan imponer la equiparación de las víctimas en los dos bandos. Y, en consecuencia, la posición de los que consideran que, para hacer posible la Transición, se hizo bien en no exigir esas responsabilidades y que, si bien la Ley aprobada "no es una ley muy audaz, muy rompedora(...)", tampoco en las circunstancias en las que salió se podía hacer otra cosa" (José Álvarez Junco).

Lo grave no es pues el hecho de que esta posición sea hoy mayoritaria entre la clase política sino que la mayoría de los colectivos memorialistas se ve cogida en la trampa de esa Ley.

No olvidemos...

Sí, no olvidemos que tuvieron que pasar treinta y un años después de la muerte de Franco para que la Ley de « Memoria Histórica » fuese aprobada por escasa mayoría en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y todos sabemos que, pese a la decepción provocada por su cobarde contenido entre los colectivos que pasaron tanto años deseándola y esperándola, la mayoría de ellos se contenta ahora con exigir sólo su aplicación para poder obtener la financiación que necesitan para poder realizar sus tareas específicas.

Seamos lúcidos y reconozcamos que el proceso de recuperación de la memoria histórica sólo fue posible por el esfuerzo y tenacidad de grupos muy minoritarios, y que si no se ha podido llegar más lejos es por la relación de fuerzas que nos ha sido

siempre desfavorable en el seno de la sociedad española.

No olvidemos lo que costó comprometer a los partidos políticos en el proceso y hasta dónde ha llegado ese compromiso... La realidad es que ahora sólo IU-ICV y ERC han presentado una "proposición no de ley" en el Congreso para modificar esa Ley. Tanto por considerarla insuficiente en lo que concierne a la ruptura institucional con el franquismo como porque no permite la rehabilitación judicial de las víctimas de la represión franquista. Pero, ¿qué podrán conseguir estos partidos ahora si son aún más minoritarios que lo eran ya en la pasada legislatura?

El hecho es pues que esa Ley existe, y que Zapatero y el PSOE harán todo lo posible por que no se modifique y no se vaya más lejos de lo que ella ha previsto: tanto en lo que concierne a la "rehabilitación de las víctimas de la guerra civil y de la posterior represión franquista" como en lo de la "desfranquización" institucional.

Es verdad que, a nosotros, la Ley no nos decepcionó, pues sabíamos muy bien lo que se podía esperar de los socialistas. Particularmente desde que renunciaron a exigir cuentas a los franquistas y aceptaron una Transición sin ruptura institucional con la Dictadura. Pero, reconocamos también que no fue porque su contenido era cobarde que la Ley fue aprobada por una escasa mayoría sino porque inclusive entre los que la votaron eran mayoría los que hubiesen querido pasarse de ella. Y no sólo por sentirse identificados con el espíritu y la realidad de

la Transición sino también por sentirse muy cómodos con esta Democracia surgida del franquismo.

Es por ello que considero necesario y urgente no dejarse seducir por el actual ruidal mediático y no dejar en manos de la Justicia (Garzón) el futuro del proceso de Memoria Histórica.

Por supuesto, mientras Garzón siga manteniendo su exigencia y aparente voluntad de restablecer la verdad sobre los miles de desaparecidos, habrá que seguir aportándole cuanto información se le pueda proporcionar al respecto e intentar que lleve la instrucción lo más lejos posible... Pero, sin dejar de estar vigilantes de lo que haga y decida, para evitar que la instrucción se eternice y que los que quieren desactivar el proceso de recuperación de la Memoria Histórica lo consigan.

Lo importante, lo esencial es poner en evidencia la cobardía moral y la inconsecuencia política de los partidos durante la Transición y para asumir ahora su pretendido discurso democrático. Hay que obligarles a mostrar su verdadero rostro, a desvelar sus intenciones, y obligar a la derecha a asumir su nostalgia del fascismo franquista. De ahí que sea tan importante recuperar la memoria y que las nuevas generaciones puedan conocer ese pasado. Y no sólo para saber lo que pasó y por qué pasó sino para comprender el por qué hoy estamos como estamos.

Perpiñán, 22 de septiembre de 2008.

Octavio Alberola

ATADO Y BIEN ATADO

Todo sigue igual aunque tengamos Ley de la Memoria

Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.

1. Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura...

2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurren razones, artísticas, arquitectónicas o artístico religiosas protegidas por la ley.

3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.

Esto es lo que se aprobó en la Ley 52/2007, “Ley de la Memoria”, y otra cosa bien distinta es la falta de celo por parte del Gobierno para su cumplimiento, parece que aún se tenga miedo a la reacción de la Iglesia, a los militares y a la derecha más recalcitrante.

Franco ¡presente!

Francisco Franco sigue presente como Hijo Adoptivo, Predilecto, Predilectísimo. Alcalde Honorario, Alcalde Honorario Perpetuo. Padre de la provincia, Medalla de Oro de la ciudad o de la provincia... Son algunas de las muchas distinciones y condecoraciones que recibió y todavía ostenta, en algunas poblaciones de nuestro país. Vemos cuales:

Alcalde Honorario de la ciudad de Bilbao, Burgos, Huelva, Huesca, Salamanca, Teruel. Hijo Adoptivo y Predilectísimo de A Coruña, Granada, Huelva, Oviedo. Medalla de Oro de la ciudad de Ávila, Bilbao, Burgos, Castellón, Huesca, Logroño, Oviedo, Pontevedra, Segovia, Tarragona, Toledo, Valladolid, Zamora. Medalla de Oro de la provincia de Cáceres. También Carmen Polo, la mujer de Franco, mantiene aún una Medalla de Oro de la ciudad de Vitoria.

El callejero del terror

Pese a la loable inclusión en el callejero de la gran mayoría de nuestras ciudades de nombres como Constitución, Libertad, Democracia... y de víctimas del fascismo como Federico García Lorca, Miguel Hernández o Antonio Machado, entre otros, permanecen por pueblos y ciudades de nuestro país, para sonrojo de cual-



Altar de la Iglesia del Carmen (Valencia), primero izquierda, Franco. Foto Cristina Escrivá



Colegio Público de Valencia. Foto Cristina Escrivá

quier demócrata, una lista interminable de fascistas conocidos. Daremos algunos ejemplos:

Generales golpistas: Aranda (Ceuta, Madrid, Ourense), Franco (Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela), Fanjul (Cuenca, Madrid, Santa Cruz de Tenerife), Goded (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla), Millán Astray (Alicante, Melilla, Madrid), Mola (León, Cádiz, Jerez de la Frontera, Málaga, Santa Cruz de Tenerife), Moscardó (Melilla, Santander, Guadalajara, Jaén, Madrid, Toledo, Valencia, Zaragoza, Almería), Queipo de Llano (Cádiz, Málaga), Sanjurjo (León, Jerez de la Frontera, Málaga, Logroño, Santa Cruz de Tenerife, Valencia), Varela (Cáceres, Cádiz, Jerez de la Frontera, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia, Zara-

goza), Yagüe (León, Cáceres, Madrid, Zaragoza, Oviedo).

Políticos como Calvo Sotelo (Alicante, Málaga, Santander, León, Jaén, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Santa Cruz de Tenerife, Oviedo, Ávila)

Falangistas: José Antonio Primo de Rivera (Melilla, Jerez de la Frontera, Soria), García Morato (Alicante, Ceuta, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Valladolid), Edilla (Santander), Ruiz de Alda (Santander, Melilla), Onésimo Redondo (Melilla), José Antonio Girón (Jaén)

En Málaga y Melilla, una larga lista de Alféreces Provisionales, y además en Melilla una lista de Falangistas locales, que por una coincidencia macabra, por aquello



A la izquierda distintas placas franquistas en la Comunidad de Madrid tomadas entre 2007 y agosto de 2008. Fotos: www.foroporlamemoria.info

del orden alfabético, preceden a Federico García Lorca.

Para acabar con un pupurri conmemorativo: División Azul (Alicante, Santander, Jaén, Toledo). Los Luceros (Alicante, León). Caídos en la Guerra Civil (Guadalajara, Logroño). Auxilio Social (Melilla). Héroe del Alcázar (Ávila). Frente de Juventudes (Segovia). Fuero del Trabajo (Burgos). Alférez Provisional (Logroño). Sargento Provisional (Ávila). 18 de julio (Cáceres). Así como poblaciones con el “estigma” de Franco: Águeda del Caudillo (Salamanca), Guadiana del Caudillo y Gévora del Caudillo, ambas en Badajoz.

Esta es una muestra del “rico” callejero franquista y eso sin hablar de la gran cantidad de placas, cru-

Murcia, 29 de Marzo de 1939, los fascistas retiran las placas de las calles y plazas de la España republicana.



ces de los caídos y escudos preconstitucionales, etc. que pueblan este país, ensalzando a los vencedores. Tampoco, por supuesto, hay que olvidar el macabro Valle de los Caídos con su altísima cruz, donde tanta sangre de derramó durante su construcción por los presos republicanos, y que aún permanece erguida para escarnio de la humanidad.

Pues bien, aunque esta Ley nos parecía insuficiente hay algunos artículos aprovechables pero la realidad confirma que no hay ningún interés en que se aplique y desarrolle. Un fraude más y un flaco favor para la recuperación de la memoria colectiva.

Rafa Maestre

¿QUÉ HA PASADO CON LOS BIENES EXPROPIADOS A LOS MILITANTES DEL BANDO REPUBLICANO?



Placa situada a la entrada del Parque de la Memoria de Saraguda. Foto: Antonio Somoza.

A partir de la mal llamada Transición hemos oído hablar y hemos leído, en repetidas ocasiones, sobre la devolución del patrimonio histórico. Pero siempre se trataba del patrimonio perteneciente a las organizaciones sindicales. Más adelante, y como fruto de la negociaciones políticas entre PSOE y PNV se ha pasado a reconocer derechos de organizaciones políticas. Pero ¿alguien ha oído hablar de la devolución de los bienes incautados a los que habiendo militado en organizaciones del lado republicano, perdieron sus bienes por el sólo hecho de ser de izquierdas?

El hecho es que como las posibles reclamaciones que se hubieran podido hacer tampoco salieron a la luz, al menos con la fuerza y en los foros públicos en que salieron las reclamaciones de las organizaciones citadas, nadie reparó en ellas... salvo los interesados. A las reclamaciones individuales presentadas ante la Administración a raíz de la aparición de la ley, (los casos más conocidos fueron algunos prohombres de la República cuyas familias reclamaron la devolución de bibliotecas,

y bienes culturales), se les contestó, en aquel momento, que la ley no reconocía derechos más que a las organizaciones sindicales

La posibilidad de saber algo sobre el tema me llegó de la mano de un hecho fortuito: en 1986, cumpliendo el encargo de CGT (entonces, todavía CNT) de investigar sobre el Patrimonio histórico libertario, tuve la ocasión de visitar y trabajar, junto con otro grupo de compañeros, en muchos de los archivos locales, provinciales, de organismos de todo tipo, rastreando posibles incautaciones realizadas por los franquistas a raíz de la guerra. Por esta razón, me encontré en el archivo de una diputación provincial, con un espectacular descubrimiento: un cuarto de unos 20 metros cuadrados lleno de expedientes de incautación de bienes ja paisanos! realizadas en pueblos de esa provincia y de las limítrofes. Tanto la persona con la que iba como yo mismo estuvimos toda la mañana buscando entre tanto expediente –había miles de éstos– aquellos que se refirieran a organizaciones libertarias, lo que nos permitió revisar y conocer muchos de aquellos expedientes, hacinados, referentes a incautaciones particulares.

Pudimos ver los suficientes expedientes como para hacernos una idea de la estructura de los procedimientos que se seguían en la incautación de los bienes de los particulares: un edicto del alcalde del pueblo, habitualmente falangista, llamando a presentarse en el ayuntamiento a los vecinos pertenecientes al bando republicano; pasados los días dados de margen (¡quién se iba a presentar sabiendo lo que le esperaba!) se publicaba un nuevo edicto comunicando la incautación de los bienes de los no personados. Y a continuación se relacionaban esos bienes: una vivienda de una planta con corral, una mesa, 4 sillas, una artesa para guardar el pan, 3 gallinas, una tierra, un arado, etc. Después, se sacaban a subasta pública los bienes incautados: ¿Quiénes concurrían a esa subasta? Podemos imaginar que no eran otros vecinos del sector “rojo” sino los ganadores de la guerra... Pudimos comprobar que había casos en que se podía decir que la mitad del pueblo se había quedado con los bienes de la otra mitad...

La lectura de los expedientes daba para comprender las terribles y brutales historias que se traslucían

desde aquellos alegatos escritos, hacinados sin orden, en un sótano olvidado de un archivo provincial: familias a las que se les había quitado todo lo que tenían como represalia por no haber entregado al pelotón de ejecución o a la cárcel a algún familiar por el hecho de ser “rojo” o que como tal lo hubiera denunciado algún vecino...Y esta situación se repetía una y otra vez, pueblo tras pueblo. Pudimos ver bastantes casos, pero nos resultaba escalofriante pensar en lo que esto había podido suponer en toda España.

¿Qué había pasado desde entonces hasta nuestros días?

Parece obvio que durante la noche del franquismo no se le pasó por la imaginación, a ninguno de los afectados, plantear reclamación alguna. Pero ahora, ya en la democracia, tal vez, al hilo de la ley que reconocía derechos a organizaciones históricas del tiempo de la guerra o a las que acreditaran que eran sus herederas, podía alguien plantearse reclamar lo que les fue expoliado de manera tan canalla.

Nos fuimos del archivo pensando en volver y hacer un trabajo más siste-

mático. Esto se demoró más de un año. Cuando volvimos, el archivo de la diputación contaba ya con una flamante directora que nos atendió con toda amabilidad. Le preguntamos por los expedientes de incautación, cosa que le sonó a chino; bajamos al sótano, nos abrieron el cuarto donde habíamos visto hacinados, casi hasta el techo, los expedientes de los que venimos hablando y... ¡estaba vacío! Nadie supo darnos ninguna explicación de dónde habían ido a parar aquellos miles de carpetas.

Varios meses después, coincidí, en Madrid, con un conocido historiador de la España contemporánea, y por tanto de la guerra, que me comentó que había conocido expedientes como los que nosotros habíamos revisado y que, en una de sus correrías por los archivos españoles, había visto una circular de la Administración en la que se instaba a la eliminación de los expedientes del tipo de los que hemos comentado en aras de la concordia nacional y la desaparición definitiva de las dos Españas...

Carlos RAMOS,
FSS-Madrid

ESCLAVITUD SILENCIADA

Trabajos Forzados y Ley de Memoria Histórica

La llamada ley de Memoria Histórica sigue silenciando la esclavitud bajo el franquismo. La ley tiene graves carencias que ya han sido puestas de manifiesto por otros colectivos, como las referidas a que se sigue sin declarar la nulidad de los juicios y procedimientos franquistas, la ausencia de cualquier exigencia de responsabilidades legales o políticas, si quiera simbólicas, para los responsables de violaciones de derechos humanos, el establecimiento de indemnizaciones solamente para los familiares de asesinados posteriormente a 1959, o la total ausencia de autocritica respecto al silencio mantenido por el estado en estas cuestiones durante la transición. Además de estas cuestiones globales, queremos remarcar también otras cuestiones que tienen que ver con el campo de la represión franquista en el que se centra nuestro trabajo como asociación, el de los trabajos forzados.

1. Indemnizaciones.

El artículo 7 recoge también la estancia en batallones de trabajos forzados como motivo de indemnización, pero señala que es necesario un tiempo mínimo de tres años. Esto es ya de por sí criticable en el caso de la estancia en cárceles, pero parece especialmente injusto que quienes estuvieron uno o dos años, o incluso casi tres años, trabajando gratis no reciban ninguna indemnización por ello. Paradójicamente, el mismo texto cita textualmente a los Batallones Disciplinarios, pero sin embargo, varios miles de jóvenes que fueron destinados a estos batallones por motivos políticos no podrán cobrar ninguna indemnización, de manera que aunque se contempla la estancia en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, quienes "solamente" hubieran sufrido este castigo, sin haber estado anteriormente en Batallones de Trabajadores o en prisión, no percibirán ninguna indemnización ya que los BDST tienen una existencia inferior a los tres años, excepto los escasos batallones de penados. Así las cosas, varios miles de esclavos y esclavas del franquismo no percibirán ninguna indemnización ni reconocimiento público por no llegar a estar tres años trabajando, como si la explotación y el maltrato que sufrieron no mereciera ser compensado de ninguna manera.

2. Responsabilidad empresarial.

En segundo lugar, es especialmente injusto y sangrante que la ley no contempla el pago de indemnizacio-



Placa conmemorativa situada en Mallorca. Autora: Nuria Teruel.



Barracones del BDST 38 en Aritxulegi (Gipuzkoa), construyendo la carretera Oiartzun (Gipuzkoa) -Lesaka (Navarra). 1941-42. Cesión de la fotografía: Familia de Julián Gurtubai.

nes por parte de las empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo. Además de por parte del propio estado, el trabajo de hombres y mujeres antifascistas fue utilizado por diferentes empresas, ya fueran mineras, constructoras, siderúrgicas, textiles, de transportes que encontraron en esta modalidad represiva una forma

fácil de aumentar sus beneficios sin pagar apenas los costes de la mano de obra, que era suministrada a precios muy inferiores a los del mercado por el Patronato de la Merced. Algunas de estas empresas hace tiempo que desaparecieron, pero sin embargo otras siguen funcionando hoy en día, y crecieron en los años



de posguerra gracias en gran parte al empleo de población cautiva. De hecho, es imposible explicar la acumulación de capital de constructoras como Dragados y Construcciones, Huarte o Banús sin hacer mención al empleo de presos políticos durante la posguerra. Y no sólo empresas privadas, sino que también ayuntamientos, instituciones como la Iglesia y empresas públicas como RENFE también utilizaron a presos y prisioneros para realizar diversos trabajos. Es evidente que el trabajo esclavo constituyó una de las claves de la acumulación de capital durante la posguerra. Sin embargo, mientras que en Alemania las empresas y también la Iglesia católica se han visto forzadas por la ley al pago de indemnizaciones, en España no se contempla ninguna medida de este tipo.

3. Lugares de la memoria de la esclavitud.

Un elemento clave también ausente de esta ley es el desinterés por convertir los campos de concentración y de trabajo forzoso en lugares de la memoria y de utilidad educativa. Mientras en los países de Europa occidental que sufrieron el fascismo se emprendieron políticas de la memoria, más o menos acertadas o

incompletas, con el objetivo de denunciar los horrores del universo concentracionario, en España sigue en gran parte extendido un extenso desierto de silencio. De hecho, el brevísimo artículo 17, (el más corto de toda la ley, referido a las obras realizadas mediante trabajos forzados), señala que el Gobierno confeccionará un censo de edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos, algo que vemos como necesario. Ahora bien, no hay ninguna mención a la señalización pública de que esas obras fueran realizadas con trabajos forzados, y menos aún a la construcción de museos o centros de interpretación que muestren los horrores de esta variedad represiva o a la protección jurídica de estos espacios. Se realizarán censos, pero ¿para qué? ¿No es necesario incorporar a los programas escolares la experiencia de los campos de concentración, como se hace en otros lugares europeos?

4. El Valle de los Caídos.

Todas estas carencias están presentes también en uno de los monumentos más simbólicos del trabajo esclavo en España, el llamado Valle de los Caídos, que se mantiene de hecho como lugar de público homenaje a los vencedores de la guerra y a los padres del fascismo español: José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. Se mantienen las tumbas de estos dirigentes fascistas en un lugar público, se pierde la oportunidad de crear un centro de interpretación que aproveche el edificio como museo de la represión franquista y de los trabajos forzados, e incluso se prohíbe de manera solapada un posible homenaje público a los presos que trabajaron en su construcción, al señalarse que no podrán llevarse a cabo "actos de naturaleza política" en dicho recinto (artículo 16.3).

Así pues, al igual que en otro tipo de cuestiones, también en lo que se refiere al universo concentracionario y a los campos de trabajo forzado la ley tiene graves carencias, al tiempo que mantiene silenciados muchos aspectos de esta faceta represiva. Es una injusticia hacia el pasado, hacia quienes sufrieron esos castigos, y también un error cara al futuro. De hecho, la memoria de la guerra, la represión y la esclavitud debería servirnos para desterrar de nuestra sociedad la lógica de la guerra y de las violaciones de derechos humanos, y eso es especialmente necesario en los inicios de un siglo XXI marcado por nuevas escaladas armamentísticas, por la vulneración de los derechos de las personas presas, por legislaciones especiales y por recortes de libertades a nivel mundial.

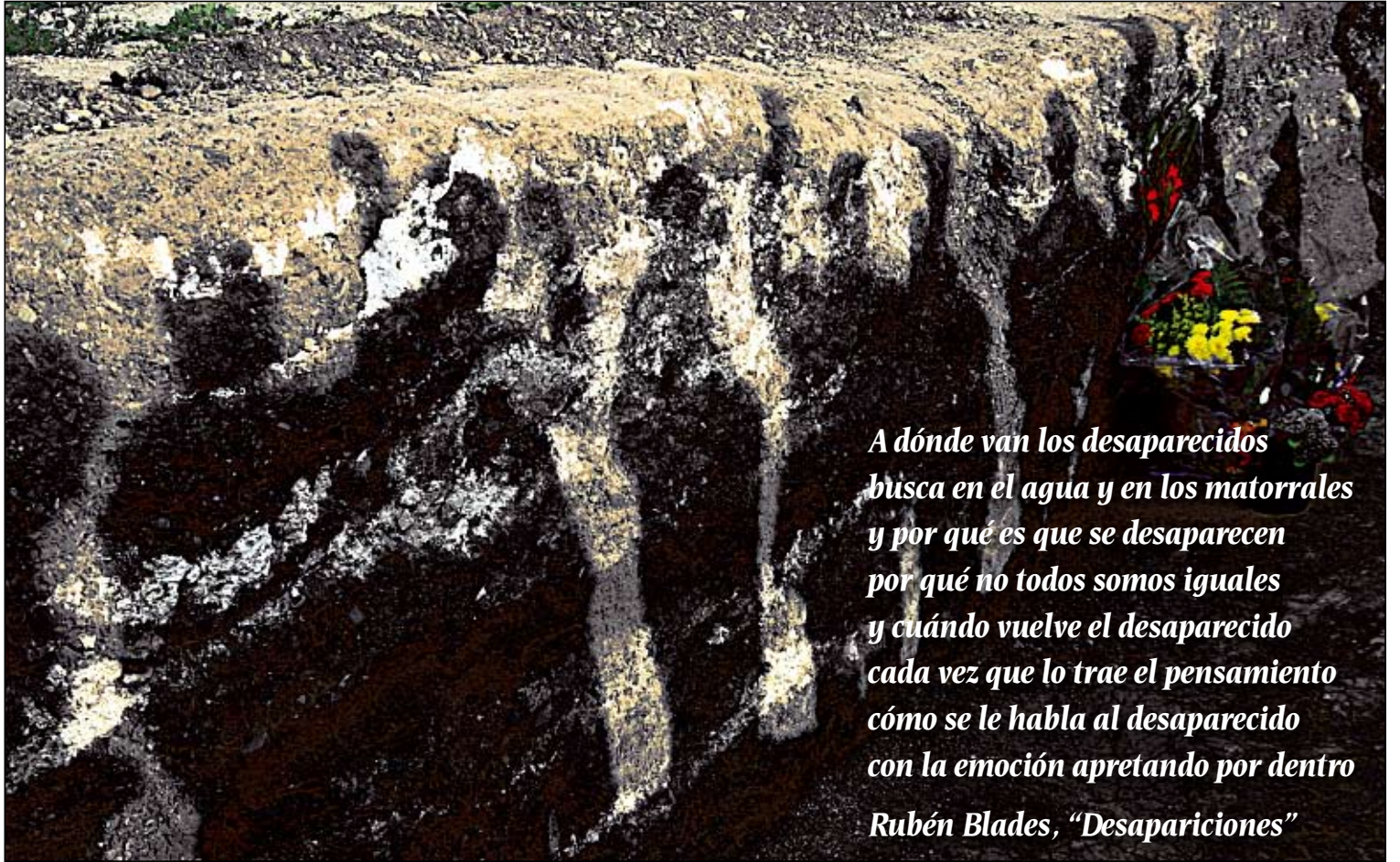
Fernando Mendiola

LAS SOMBRAS DE LA HISTORIA

La redacción final de la Ley de Memoria Histórica ha frustrado muchas expectativas y esperanzas que se habían abierto con el compromiso público del Presidente del Gobierno de presentar una ley que sirviera para dignificar la memoria de los perdedores, para recuperar los cuerpos de los que fueron enterrados en cunetas y fosas comunes y para tener un conocimiento lo más exacto posible de todo lo acontecido durante la II República, la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición. Según el texto aprobado, la responsabilidad de las exhumaciones, como la de la solicitud de anulación de las condenas se hace recaer en los familiares y en las asociaciones de familiares, eludiendo el Estado sus responsabilidades.

En el caso de las exhumaciones el redactado de la ley es un claro ejemplo de cinismo político. Aseguran que tratan de ayudar a las familias y lo que realmente hacen es escurrir el bulto y hacer recaer en los ciudadanos unas responsabilidades que le corresponden a la Administración. El mismo diario "El País", el más afín al Gobierno entre los periódicos nacionales, editorializaba sobre el asunto en su edición del pasado domingo 14 de septiembre. "Hace tiempo que este segundo problema (la existencia de decenas de enterramientos clandestinos) debería estar resuelto, y no a instancias de la Audiencia Nacional ni tampoco de las asociaciones de la memoria histórica. Tendría que ser la Administración la que tomara la iniciativa bajo el impulso de la normativa existente sobre la sepultura de cadáveres. Resulta inexplicable que el Estado conozca la existencia de enterramientos clandestinos y se inhiba o, peor aún, abdique de sus obligaciones a favor de las asociaciones".

El Franquismo realizó las exhumaciones de los muertos en zona republicana mientras continuaba asesinando a los que hoy en día siguen en fosas y cunetas. Para ello y para escribir su versión de la historia movilizó todos los resortes del Estado. Hoy en día, el Estado que se reivindica democrático se desentiende de los que murieron defendiendo la legalidad frente a los golpistas. Delega en los familiares de las víctimas los trabajos de investigación y exhumación, en lugar de tomar la iniciativa para conocer todos los lugares de enterramiento, el mayor número posible de nombres y las circunstancias en las que se produjeron los fusilamientos o las desapariciones. En sus manos están todos los resortes, tanto la capacidad legislativa, como los fondos documentales de los archivos y el impulso de la investigación histórica sobre la Historia de la Guerra y la Dictadura.



*A dónde van los desaparecidos
busca en el agua y en los matorrales
y por qué es que se desaparecen
por qué no todos somos iguales
y cuándo vuelve el desaparecido
cada vez que lo trae el pensamiento
cómo se le habla al desaparecido
con la emoción apretando por dentro*
Rubén Blades, "Desapariciones"

La sombra de familiares de fusilados se refleja en una de las paredes de una de las fosas de San Rafael, mientras entonan La Internacional durante el homenaje celebrado el pasado día 14 de abril. Foto Antonio Somoza.



Imagen de restos aparecidos en una de las fosas del cementerio de San Rafael en Málaga. Foto Antonio Somoza.

La exhumación de las fosas, en función de la experiencia acumulada, sirve, además de para dar satisfacción a los familiares, para conocer las circunstancias de los asesinatos e incluso para conocer el destino de los huérfanos que fallecían por en-

fermedad. En las fosas comunes del Cementerio de San Rafael de Málaga se han encontrado restos infantiles entre esqueletos de adultos.

Con ser importante estas actuaciones, nunca nos llegarán a dar una

imagen real del volumen de la represión. Los fusilamientos sin juicio se sucedieron durante los primeros días de ocupación de poblaciones que habían permanecido fieles a la República y, en muchos casos, los asesinados fueron enterrados en zonas de las que no se tienen noticias o que han sido destruidas durante los años de desarrollismo franquista. Solo en la comarca de Málaga capital, según un informe del cónsul británico al Foreign Office, se calcula que fueron fusiladas 3.500 personas en la playa, el río, la zona de huertas o barrancos de los barrios periféricos. Hoy en día la mayor parte de esas zonas están ocupadas por urbanizaciones o polígonos industriales.

También es necesario investigar sucesos como, y vuelvo al caso de Málaga, el de la huida por la carretera de Almería, por la que trataron de escapar decenas de miles de malagueños y refugiados en la ciudad en vísperas de la llegada de los sublevados que, según el propio general Queipo de Llano, estaba arrasando los pueblos por los que avanzaba. Según los testimonios de supervivientes, unas 5000 personas pudieron perder la vida en los bombardeos que sometió la Marina y la Aviación a la población civil que huía despavorida.

Y más sombras, gracias a las exhumaciones hemos conocido el destino de muchos niños que fallecieron en prisión, pero ¿qué fue de todos aquellos que sobrevivieron?

En las fosas del cementerio de San Rafael de Málaga se han recuperado ya los restos de más de 2000 fusilados y la Asociación ha logrado documentar el fusilamiento de más de 4.000 personas; pero, y vuelvo a las fuentes históricas, tanto Anthony Beevor como Hartmut Heine citan en obras recientes¹ el mencionado informe del cónsul británico en el que se asegura, que "desde el 15 de febrero de 1937 hasta el 25 de agosto de 1944, otras 16.952 personas fueron condenadas a muerte y fusiladas en Málaga". Un número al que habría que sumar los fusilamientos extrajudiciales, los muertos en prisión y los que fueron abatidos en la carretera de Almería. Si los escritos de los generales que llevaron adelante el golpe en los que planificaban la represión no son suficientes para considerarla como genocidio, el volumen de la misma (podríamos estar hablando de casi 25.000 personas en una sola provincia y puede que no sea la peor) deja en evidencia el carácter de la matanza.

Antonio Somoza

¹ Heine, Hartmut y Azuaga, José María: *La oposición al Franquismo en Andalucía Oriental*. Fundación Salvador Seguí Ediciones, Madrid 2005.

Beevor, Antony: *La Guerra Civil Española*, Editorial Crítica, Barcelona 2005



Numerosos familiares de víctimas acudieron a la rueda de prensa

Presentados datos de miles víctimas del franquismo ante la Audiencia Nacional

A las once de la mañana del 22 de septiembre, CGT y las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica personadas ante la Audiencia Nacional para el esclarecimiento de las desapariciones producidas en el franquismo hacían entrega en este tribunal de los datos de miles de víctimas del régimen anterior. Los demandantes han realizado dicha entrega ante la sospecha de que las instituciones públicas a las que el juez Garzón ha realizado la petición no iban a aportar los datos requeridos.

*Texto e imágenes:
Roberto Blanco*

La mencionada denuncia aún no ha sido admitida a trámite. Las Asociaciones demandantes tienen la esperanza de que finalmente sea admitida para que se puedan cumplir así sus tres objetivos: esclarecimiento de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura. En rueda de prensa realizada a las doce y media, los portavoces de las asociaciones declaraban estar muy orgullosos de los resultados del ingente trabajo realizado, recordando además que estamos ante delitos de lesa humanidad, por lo que no prescriben ni se pueden acoger a la Ley de Amnistía. En este sentido, han citado como ejemplo los casos de Argentina, Chile o Sudáfrica.

A renglón seguido, Empar Salvador, del Fórum per la Memoria del País Valencià, desglosaba la cifra por comunidades autónomas, dejando claro que se trataba de cifras orientativas, pues en la actua-



Los portavoces de las asociaciones declararon estar muy orgullosos del trabajo realizado

lidad se siguen investigando miles de casos nuevos aún no registrados. Salvador insistió en la idea de que cada una de las cifras representa a una persona, con sus ideas, sueños, proyectos... Y con un entorno familiar que quedó destrozado tras su asesinato.

A continuación, Cecilio Gordillo, de CGT Andalucía, ha dejado claro, para evitar ar-

gumentaciones demagógicas por parte de la derecha, que la única persona que en estos momentos tiene un listado completo y por lo tanto puede dar una cifra global es el juez Garzón. Los datos presentados, por la naturaleza de su recogida (de abajo arriba), pueden presentar repeticiones, por ejemplo por cuestiones de movilidad geográfica, pudiendo

aparecer una persona en el listado de su lugar de origen y en el del lugar en el que fue asesinado. Es ahora labor de Garzón y su equipo cruzar estos datos y aportar cifras definitivas. Gordillo también ha denunciado el hecho de que hay muchas investigaciones sobre desaparecidos a las que no han podido tener acceso por diversos motivos, pese a que muchas de ellas se han efectuado con dinero público.

Los portavoces han aprovechado para exponer la necesidad de los familiares de contar con oficinas de información sobre las víctimas. Éstas deberían crearse en los Ayuntamientos, que deberían escuchar a los familiares, cruzar los datos recogidos y ponerlos a disposición de la Audiencia Nacional, haciendo posible que cualquiera pueda tener un lugar al que acudir y decir “¿dónde está el listado para poner a mi padre?” y que esto sirva de algo.

Fernando Magán, abogado de un buen número de asociaciones de memoria, ha confirmado que Garzón les ha recibido personalmente y ha estado presente cuando ha comenzado la entrega de la documentación. Pero “lo más importante —ha dicho— no ha sido esto, sino que ahora la Audiencia Nacional cuenta con una lista de miles de nombres, fruto del esfuerzo de los demandantes”. Magán ha insistido en la necesidad de que el sistema académico colabore en este esfuerzo por decir dónde sucedió lo que se está denunciando, en qué momento y por qué causas. Lo mismo, según el abogado, puede hacer el Gobierno a través del Ministerio del Interior.

En éste sentido, Cecilio Gordillo ha apuntado que el Gobierno debería pedir informes a los Ayuntamientos sobre cuántas fosas hay en sus cementerios. En cuanto a las que están fuera de estos, Gordillo ha sostenido que la misma petición se debería hacer a la Guardia Civil, que conoce la situación de la mayoría de ellas, como él mismo ha podido comprobar en algunos lugares a los que ha acudido personalmente.

Para finalizar, Empar Salvador ha culpabilizado del retraso que está sufriendo el esclarecimiento de lo que aquí sucedió durante la guerra y el franquismo a la falta de voluntad política de las instituciones. “Creemos que [dicho esclarecimiento] es un derecho de la víctima y un deber del Estado. La ley aprobada por el gobierno socialista no nos basta, motivo por el cual la hemos rechazado el 95 % de las asociaciones”, concluyó.

Un centro de inserción social llevará el nombre del anarquista sevillano Melchor Rodríguez

Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias anunció el día 16 —en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid y organizado por la CGT y “RMHSA” de CGTA, donde se rendía homenaje y reconocimiento a Melchor Rodríguez “el ángel rojo”— que el Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares llevará su nombre, así como la edición de un cuaderno donde se reproducirá, íntegramente un folleto editado en 1937, acompañado por textos de escritor Alfonso Domingo y el historiador José L. Gutiérrez Molina, como una forma de pagar nuestro olvido con alguien que arriesgo su vida en defensa de la vida de aquellos que no pensaban como él.

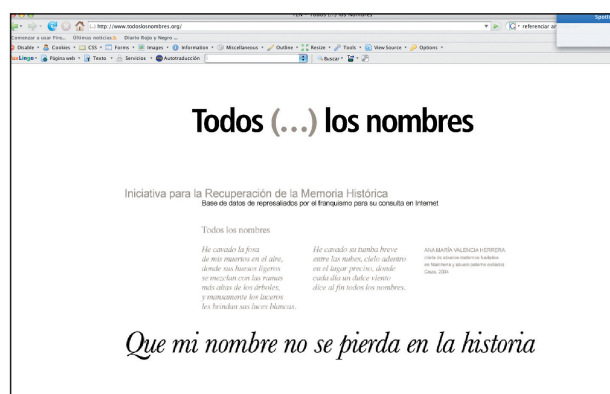
En el acto había una amplia representación (tres generaciones) de la familia de Melchor, así como algunas personas que se relacionaron con él y que sentían una profunda admiración por su comportamiento moral y ético en los años más duros de la Guerra Civil y de la dictadura.

Durante las intervenciones se reivindicó la necesidad de que Madrid rotulara una de sus calles con el nombre del Melchor, concretamente la c/ Fomento y que el Ayuntamiento de la ciudad reconociera que fue el último alcalde —de hecho— de la ciudad en representación de la República. En este sentido se informó que Sevilla —junto a una barriada autoconstruida (Valdezorras) fundamentalmente por familiares de expresos políticos del franquismo— ya ha decidido rotular una calle con su nombre, algo que se venía demandando desde principios de los años 80.

El acto contó con el apoyo de diversas asociaciones (ARMH, AMHyJA, Amical de Mathausem, Fundación Salvador Seguí...)

*Sevilla 17, septiembre 2008
Cecilio Gordillo, Coord.
“RMHSA” de CGTA*

visita www.todoslosnombres.org



Homenaje a Melchor Rodríguez: Crónica de una emoción

Desde que el movimiento de la sociedad civil de recuperación de la memoria histórica surgió en nuestro país, muchos han sido los actos para reivindicar la actuación de personas ya desaparecidas, pero que en aquellos días de barbarie constituyeron un ejemplo de dignidad y de defensa de sus ideas.



Ilia Galán, Cecilio Gordillo, Rafael Cid y Alfonso Domingo, durante el acto

Texto: Alfonso Domingo
Fotos: Quieres Callarte

A menudo en estos actos, la distancia que en cualquier conferencia o acto público separa a los miembros de la mesa del público asistente desaparece gracias a un sencillo fenómeno de emoción. En el acto de Homenaje a Melchor Rodríguez García —presidido por un cartel con la foto de Melchor y una de sus frases más célebres: “Se puede morir por las ideas, nunca matar por ellas”—, que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid el día 16 de septiembre, esta premisa se dio con generosidad. Se sabe que la presencia de los estrados impone, separa, abre espacios entre el público y los oficiantes, consagra huecos y distancias, abre brechas de formalidad muchas veces difíciles de saltar. www.todoslosnombres.org estará presente el día 22 en la Audiencia Nacional en el acto de entrega de la documentación y aportará 357 nombres más a los remitidos el pasado día 10.

El acto en el Ateneo de Madrid borró todos esos contornos porque frente a la distancia inevitable de la mesa a las butacas del aforo, de la imponente presencia de los próceres que desde sus retratos miraban con cierta gravedad, circuló una corriente de calidez y simpatía, una entrañable sensación de que todos los que estábamos allí veníamos a homenajear y conocer la historia de un hombre sencillo que sin embargo hizo algo grande en la historia de España, aunque aún sea bastante desconocido por muchos españoles.

Los asistentes —que prácti-

camente llenaron el salón de actos— provenían de los medios más variados. Acudieron familiares —tres nietos y una sobrina de Melchor—, amigos del anarquista, —entre ellos Carmen Bueno, viuda del escritor libertario Eduardo de Guzmán— e incluso miembros de la administración, como la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.

A todos, jóvenes y mayores, agradeció su presencia el periodista y escritor Rafael Cid, que moderó el acto. Presentó a los miembros de la mesa, compuesta por Cecilio Gordillo, Ilia Galán y Alfonso Domingo. En la introducción de Rafael Cid ya se comenzaron a apuntar algunas de las claves de la personalidad y la actuación de Melchor Rodríguez, el llamado —a su pesar— “El Ángel Rojo”. Luego, a Alfonso Domingo, que durante cuatro años ha investigado en profundidad la figura de este libertario ejemplar para escribir el libro “Melchor Rodríguez, anarquista con ángel”, que espera pronto ver la luz, le tocó ahondar en ese conocimiento. Para ello introdujo a Melchor con un video en el que intervenían escritores libertarios como Gregorio Gallego y Eduardo Pons Prades, ya fallecidos, y la propia hija de Melchor, Amapola Rodríguez, que por problemas de salud no pudo estar presente.

El escritor dejó claro que Melchor no actuó sólo ni fue el único, pero que su decisión y su coraje fueron vitales para detener las “sacas” de las prisiones de Madrid. Ya desde el primer momento de la guerra, Melchor se dedicó a dar avales, a refugiar



Detalle del audiovisual proyectado

a personas perseguidas y a sacar a otros de las checas. Habló de estos y otros aspectos de su vida, y destacó la gesta de la cárcel de Alcalá, donde Melchor se enfrentó en diciembre de 1936 a una turba que quería acabar con los 1532 presos allí encerrados como represalia por un cruel bombardeo franquista, uno de los momentos más difíciles de su vida. Una vida que comenzó en Sevilla en 1893, donde nació en el seno de una familia humilde. Pronto se quedó huérfano y tuvo que ponerse a trabajar como aprendiz de chapista, labor que alternaba con su afición al mundo de los toros, donde llegó a ser novillero, y su afiliación a CNT. Truncada su carrera taurina por dos cogidas, se trasladó a Madrid en 1920, donde fue uno de los anarcosindicalistas más activos, dentro del mundo madrileño, junto con Cipriano Mera, los hermanos González Inestal, David Antona, Mauro Bajatierra y otros.

Alfonso Domingo dejó claro que Melchor Rodríguez García fue una de las figuras más representativas de una corriente anarquista que tuvo en la guerra civil la prueba más dura a la que se puede enfrentar un libertario: defender la vida de sus enemigos. Esta corriente, el anarquismo humanista, tuvo arraigo en varios grupos ácratas de Madrid, entre ellos “Los Libertos”, el grupo al que perteneció Melchor desde sus inicios en la FAI.

La intensa actividad sindical que desarrolló desde las ideas y la acción directa, junto con su labor de articulista y versificador, le llevaron numerosas veces a la cárcel. No es extraño, pues, que se encargara dentro de CNT del comité pro-presos y que cuando llegara la guerra, el ministro anarquista García Oliver, le hiciera responsable de las prisiones republicanas entre noviembre de 1936 y marzo de 1937. Posteriormente, hasta el fi-

nal de la contienda, fue concejal de cementerios de Madrid por la FAI. Como representante del consistorio madrileño, le cupo la tarea de entregar la ciudad de Madrid a los nacionales el 28 de marzo de 1939.

Su actuación humanitaria no le libró sin embargo de la represión de los vencedores, que tras la guerra le sometieron a un juicio amañado, con testigos falsos. En este consejo de guerra le pidieron la pena de muerte y finalmente se la conmutaron por una condena de 20 años, de los que cumplió 5. El general Muñoz Grandes, uno de los que había salvado Melchor en la guerra, tuvo la gallardía de levantarse en el juicio para defender su actuación y aportar la firma de más de 2000 personas salvadas asimismo por el anarquista.

Desde que salió de la cárcel en 1944, Melchor colaboró en varios comités cenetistas clandestinos y en la reorganización de la CNT del interior, sufriendo varias veces la cárcel por ello. En total, Melchor visitó 34 veces la prisión y él mismo decía que era de los pocos presos que había conocido la cárcel bajo los tres regímenes, la monarquía, la república y el franquismo. También se siguió dedicando a los presos políticos, vocación a la que dedicó toda su vida, utilizando para ello las amistades que tenía en el régimen —como Martín Artajo, Girón—, para suavizar condenas y obtener libertades.

Su muerte, en 1972, fue también muy simbólica. Allí estaban compañeros anarquistas y personajes del régimen. Se rezó un padrenuestro y se leyó un poema de Melchor sobre la anarquía. Fue el único caso en la historia del franquismo en que alguien fuera enterrado con una bandera anarquista.

Tras la intervención de Alfonso Domingo, Rafael Cid añadió que ese ejemplo de humanismo anarquista que Melchor había dado era el mismo que había animado a otros a lo largo de la guerra. Entre ellos citó a Durruti — que protegió a un sacerdote al que hizo su secretario en la guerra civil— a Peiró o Abad de Santillán.

Cecilio Gordillo, por su parte, enlazó la convocatoria y el homenaje que se celebraba con otros rescates de la memoria histórica libertaria, como el caso del médico Pedro Vallina y el maestro Sánchez Rosa, ambos sevillanos, como Melchor. En la campaña para reivindicar esta memoria ya se ha conseguido que el Ayuntamiento de Sevilla rotule con el nombre de Melchor Rodríguez una de las calles del municipio, precisamente cerca de una barriada que levantaron los republicanos encarcelados del “canal de los presos”.

También se refirió a la actual situación del movimiento de la memoria histórica, y a “Todos los nombres”, que ha recopilado hasta ahora los casos de más de 22.000 personas asesinadas por el franquismo. El que cada uno

de estos casos, con sus nombres, pueda dejar de ser un número para convertirse en una persona, con nombre y apellidos, con rostro, con una historia detrás, ha sido una de las razones para continuar con esa misión durante varios años. Todos estos casos se han entregado al juez Garzón, según confirmó Cecilio Gordillo.

El profesor de la Universidad Carlos III, Ilia Galán, habló no sólo de la ética, sino de la estética de los hombres como Melchor. Comenzó hablando de los tópicos, afortunadamente ya superados, que equiparaban anarquismo con bombas y destrucción. Si bien es cierto que en un conflicto como la guerra civil algunos individuos amparados por las siglas anarquistas cometieron tropelías, lo cierto es que el ejemplo de Melchor y de esos anarquistas que salvaron a sus enemigos ideológicos, anteponiendo la vida a cualquier otra cosa, es un ejemplo de ética, algo que siempre va acompañado de una estética.

En la primera de las intervenciones de los asistentes, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, hizo un importante anuncio. Se dará el nombre de “Melchor Rodríguez” a un centro de reinserción que se inaugurará la próxima primavera en Alcalá de Henares. Comenzó un diálogo entre el público y los miembros de la mesa, con numerosas preguntas sobre Melchor y la época que le tocó vivir, además de los actos o acciones que protagonizó. Fue en ese momento cuando se produjeron algunas de las intervenciones más emotivas del acto, entre ellas una protagonizada por un amigo de Melchor que habló de cómo el anarquista se había enfrentado a “la enemiga muerte”. También intervino Melchor Leal, uno de los nietos de Melchor, que agradeció, en nombre de toda la familia, el esfuerzo que tanto particulares como organizaciones estaban haciendo para honrar la memoria de su abuelo.

En esas preguntas e intervenciones se puso de manifiesto la necesidad de insistir con los alcaldes de Madrid y Alcalá de Henares para dedicar sendas calles a su memoria.

Por último, y en una atmósfera emotiva, Ruben Buren, cantautor, artista y biznieto de Melchor Rodríguez, interpretó, junto con Pedro Herrero y Luis Felipe Barrio, una canción de la época de la guerra, “Los cuatro muleros”, que puso un especial y sentido broche a una velada pródiga en emociones. Cuando todos los asistentes abandonaron el salón del Ateneo se respiraba una atmósfera distinta. La emoción por el ejemplo de este anarquista consiguió que todos saliéramos con un buen sabor de boca y con la convicción de que luchar por las ideas de dignidad, libertad y justicia es algo que honra al ser humano.